

VOTO PARTICULAR QUE EMITE LA CONSEJERA ELECTORAL LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES EN RELACIÓN CON EL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL CUAL SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS PRESIDENTES Y CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES DE ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES, IDENTIFICADO CON EL REGISTRO INE/CG165/2014, POR LO QUE HACE A LA DESGINACIÓN DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS PRESIDENTES Y CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES DE CAMPECHE, ESTADO DE MÉXICO, MICHOACÁN, NUEVO LEÓN, OAXACA, SONORA Y TABASCO.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, Base V, párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante “Constitución”), 35, 36, párrafo primero y 39, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 14, párrafo 1, fracción b), del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral y 26, párrafo 6, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presento **VOTO PARTICULAR** respecto del Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la designación de Consejeras y Consejeros Presidentes y Consejeras y Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, identificado con el registro INE/CG165/2014, y aprobado por la mayoría de las Consejeras y los Consejeros Electorales del Consejo General de este Instituto, en el marco de la sesión extraordinaria de dicho órgano colegiado realizada el pasado martes 30 de septiembre de 2014.

En relación con mi posicionamiento —tal como lo expresé y voté en el marco de la sesión en que fue presentado y aprobado el Acuerdo en cuestión— preciso que me aparto de la decisión adoptada únicamente por lo que hace a la conformación de los Organismos Públicos Locales Electorales de Campeche, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Sonora y Tabasco, porque tengo la convicción

de que a partir de los distintos perfiles, trayectorias y experiencias de los aspirantes que participaron en el proceso de selección, el Consejo General tenía la posibilidad de elegir aspirantes cuyos perfiles permitían la integración de órganos colegiados interdisciplinarios —no sólo en cuanto a las profesiones, sino por lo que hace a los perfiles, experiencias y trayectorias— que favorecerían el ejercicio de la función electoral desde una perspectiva de garantía de los derechos humanos.

ANTECEDENTES

1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en materia político-electoral. A través de dicha reforma, se creó el Instituto Nacional Electoral y, en consecuencia, se modificó la estructura, atribuciones y objetivos del otrora Instituto Federal Electoral.

Por otra parte, mediante la reforma señalada, se modificaron diversas disposiciones relacionadas con la denominación, conformación y atribuciones de las autoridades electorales administrativas en el ámbito local.

En el artículo 116, Base IV, inciso c) de la Constitución, se estableció respecto de los Organismos Públicos Locales Electorales, entre otras cuestiones, lo siguiente: *i)* deben gozar de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones; *ii)* contarán con un órgano de dirección superior integrado por un consejero Presidente y seis consejeros electorales, con derecho a voz y voto; *iii)* el consejero Presidente y los consejeros electorales serán designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en los términos previstos por la ley; *iv)* los consejeros electorales estatales deberán ser originarios de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, y cumplir con los requisitos y el perfil que acredite su idoneidad para el cargo que establezca la ley y; *v)* los consejeros

electorales estatales tendrán un período de desempeño de siete años y no podrán ser reelectos; percibirán una remuneración acorde con sus funciones y podrán ser removidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por las causas graves que establezca la ley.

En atención a lo anterior, en el Artículo Transitorio Noveno del Decreto de la reforma mandató que el Consejo General del Instituto designara a los nuevos consejeros de los organismos locales, en términos de lo dispuesto por el inciso c) de la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución; y precisó que quienes fungían como consejeros continuarían en su encargo hasta en tanto se realizaran las nuevas designaciones y llevaran a cabo los procedimientos para el nombramiento de los consejeros electorales con antelación al siguiente proceso electoral posterior a la entrada del mencionado Decreto.

2. En atención a la reforma señalada, el 03 de abril de 2014, el pleno de la H. Cámara de Diputados, designó al Consejero Presidente y a los diez Consejeros y Consejeras Electorales del Consejo General de este Instituto.

Al día siguiente, las Consejeras y los Consejeros electos rendimos protesta en sesión convocada para tal efecto y quedó integrado el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en términos de lo establecido en el artículo 41, base V, apartado A, párrafo segundo de la Constitución.

3. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, abrogando el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

De conformidad con lo previsto en la Constitución, el artículo 2, párrafo 1, inciso d) de la Ley, establece que reglamenta, entre otras, las normas constitucionales relativas a la integración de los organismos electorales.

La reglamentación de la integración de los organismos electorales está prevista, primero, en el artículo 32, numeral 2, inciso b), que señala como atribución del Instituto Nacional Electoral la elección y remoción del Consejero Presidente y los Consejeros Electorales de dichos organismos.

En armonía con lo anterior, a través de los artículos 44, párrafo 1, inciso g), y 101, párrafo 1, inciso h) de la Ley, y del artículo transitorio décimo del Decreto que expide la Ley, se establece entre las atribuciones del Consejo General, la designación de los presidentes y los consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales, precisando que deberá realizarse por mayoría de 8 votos de dicho órgano colegiado, y que para el caso de los procesos electorales locales cuya jornada electoral se realice en 2015, el proceso de designación debía desarrollarse a más tardar el 30 de septiembre de 2014.

Respecto del ejercicio de dicha facultad, en el Título Segundo de la Ley, relativo a los Organismos Públicos Locales, se precisan las disposiciones para su integración, los requisitos de elegibilidad que deben cubrir las y los Consejeros —entre ellos, no ser ni haber sido miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional durante el último proceso electoral en la entidad—, el proceso de su elección y remoción, así como sus atribuciones; y en el artículo transitorio décimo del Decreto que expide la Ley, se establece que los nombramientos deben hacerse de forma escalonada, en los siguientes términos: a) tres consejeros que durarán en su encargo tres años; b) tres consejeros que durarán en su encargo seis años, y c) un consejero que durará en su encargo siete años.

Finalmente, en el artículo 42, párrafo 5, se dispone que el Consejo General integrará la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales —que funcionará permanentemente y se conforma por cuatro Consejeros—; y a través del artículo 60, párrafo 1, inciso e), se establece que a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismo Públicos Locales, entre otras, corresponde

coadyuvar con dicha Comisión en la integración de la propuesta para conformar los órganos superiores de dirección de los Organismos Públicos Locales.

4. El 6 de junio de 2014, el Consejo General a través del Acuerdo INE/CG44/2014 aprobó los Lineamientos para la designación de Consejeros Presidentes y Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales, cuyo objeto fue establecer las disposiciones conforme a las cuales se instrumentaría el procedimiento para la selección y designación de los Presidentes y Consejeros Electorales integrantes de cada órgano superior de dirección de los Organismos Públicos Locales. En atención a su objeto, a través de los Lineamientos se reguló lo siguiente:

- i)* Los órganos del instituto que intervendrían en el proceso de selección y su ámbito de responsabilidad —particularmente, por lo que hace al Consejo General, a la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y a las Juntas Locales y Distritales.
- ii)* Las convocatorias que serían emitidas para la selección y designación de uno o varios Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales a propuesta del Consejo General para su aprobación, por parte de la Comisión —cada vez que sea necesario ocupar una vacante o renovar los órganos superiores de dirección respectivos—, precisando los elementos que debían contener, los mecanismos para su difusión, así como el hecho de que debía emitirse una convocatoria por cada entidad federativa.
- iii)* Los plazos, requisitos y procedimientos para el registro de las y los aspirantes.
- iv)* El proceso de selección, especificando las etapas que lo conformaban —a) valoración de los requisitos legales, b) examen de conocimientos, c) ensayo presencial, d) valoración curricular y e) entrevista—, los criterios de selección, la

verificación del cumplimiento de requisitos, los instrumentos de evaluación, la idoneidad y capacidad del perfil, la elaboración de las listas de aspirantes que accedían a la siguiente etapa y la participación de los Partidos Políticos y los Consejeros del Poder Legislativo y; **v)** el proceso de designación, en el que se previó la remisión de las propuestas al Consejo General, su discusión y aprobación por parte de dicho órgano colegiado y la notificación de los designados.

Dichos Lineamientos, a través de su Punto Octavo, párrafo 2, inciso b), señalan que corresponde a la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales, instrumentar el proceso para la selección y designación de las y los integrantes del órgano superior de dirección de los Organismos Públicos Locales.

5. El 20 de junio de 2014, el Consejo General a través del Acuerdo INE/CG69/2014 aprobó el Modelo de Convocatoria para la designación de los Consejeros Presidentes y Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales.

Mediante la Convocatoria, de conformidad con lo previsto en los Lineamientos, se estableció lo siguiente: **i)** bases; **ii)** cargos a designar; **iii)** documentación que debían presentar los aspirantes; **iv)** plazo para el registro; **v)** etapas del proceso; **v)** designación de las y los Consejeros y; **vi)** fechas de publicación de los resultados de designación y toma de protesta de las y los Consejeros Electorales designados.

6. El 13 de agosto del presente año, el Consejo General mediante el Acuerdo INE/CG113/2014, aprobó los Lineamientos para la aplicación y dictamen en ensayo presencial que presentarían las 25 aspirantes mujeres y los 25 aspirantes hombres de cada entidad federativa que obtuvieran la mejor puntuación en el examen de conocimientos en el proceso de selección y designación a los cargos de Consejero Presidente y Consejeros Electorales de los Organismos Públicos

Locales, en acatamiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las sentencias SUP-JDC-498/2014, SUP-JDC-499/2014 y SUP-JDC-500/2014.

7. En cumplimiento a lo previsto en los Lineamientos y la Convocatoria, este Instituto llevó a cabo el procedimiento para la designación de las Consejeras y Consejeros Presidentes y las Consejeras y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, de conformidad con lo siguiente:

- i)* Emitió 18 Convocatorias dirigidas a las y los ciudadanos que cumplieran los requisitos establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso c) de la Constitución, 100, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y Décimo Quinto de los Lineamientos, a participar en la designación de Consejeros Presidentes y Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales de las entidades con proceso electoral a celebrarse durante el presente año, a saber: Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luís Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán.
- ii)* Una vez agotado el plazo para la presentación de las solicitudes de registro y, tras la valoración del cumplimiento de los requisitos establecidos, publicó los 18 listados con los nombres de las y los aspirantes que cumplían con los requisitos de elegibilidad.
- iii)* El 31 de julio del presente año, informó a las y los aspirantes convocados a la aplicación del examen de conocimientos, que dicho examen se llevaría a cabo el dos de agosto, así como las sedes para su realización.
- iv)* Publicó la guía para las y los aspirantes elaborada con la colaboración del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C.

(CENEVAL), institución que fungió como responsable de la elaboración del examen de conocimientos.

- v) El dos de agosto de 2014, aplicó el examen de conocimientos y, posteriormente, el 16 de agosto publicó los resultados de los exámenes emitidos por el CENEVAL. En dicha publicación se precisó por cada una de las 18 entidades, el nombre de las 25 mujeres aspirantes y los 25 hombres aspirantes que obtuvieron las mejores calificaciones.
- vi) Posteriormente, informó que el ensayo presencial se realizaría el 23 de agosto del presente año y publicó los listados de aspirantes y las sedes para su realización en cada una de las 18 entidades.
- vii) Con la colaboración del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México aplicó el 23 de agosto el ensayo presencial y, posteriormente, publicó los resultados obtenidos en dicho ensayo, precisando el nombre de las mujeres y los hombres con resultado idóneo y no idóneo en el ensayo.
- viii) Una vez que se contó con los resultados del ensayo, se llevó a cabo la evaluación del perfil curricular de las y los aspirantes y, a partir de los resultados obtenidos, se publicó la lista de cada una de las entidades con los nombres de las y los aspirantes que habían pasado la etapa de valoración curricular.
- ix) Las listas referidas en el inciso anterior, fueron hechas del conocimiento de los representantes de los Partidos Políticos y los Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General, a fin de que pudieran presentar sus observaciones y comentarios. Para tal efecto, debían acompañar, en su caso, los elementos objetivos que sustentaran o corroboraran sus afirmaciones. Tras su presentación, las observaciones y comentarios

emitidos fueron hechas del conocimiento de las y los Consejeros Electorales del Instituto.

- x)** El 17 de septiembre de 2014, la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales sesionó y aprobó las listas de aspirantes que acudirían a la etapa de entrevistas.
- xi)** Las y los Consejeros Electorales del Instituto integramos 3 grupos, mismos que entrevistamos a las y los aspirantes que pasaron a esta etapa, durante el periodo comprendido entre el 18 y el 24 de septiembre del presente año.
- xii)** El 26 de septiembre la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales sesionó y aprobó la Lista de la propuesta de Candidatos a ocupar los cargos de Consejeras y Consejeros Electorales Presidentes y Consejeras y Consejeros Electorales, así como los periodos respectivos por cada entidad federativa.
- xiii)** El 30 de septiembre de 2014, en el marco de su sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG165/2014, relativo a la designación de las Consejeras y los Consejeros Presidentes y Consejeras y Consejeros Electorales de Organismos Públicos Locales Electorales.

La votación relativa a la aprobación de la integración de dichos organismos, se dio de conformidad con lo siguiente: **i)** por votación unánime de las y los 11 Consejeros que integran el Consejo General se aprobó la integración de los organismos de Baja California Sur, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Querétaro, San Luís Potosí y Yucatán y; **ii)** con el voto a favor de 10 de las Consejeras y los Consejeros electorales y un voto en contra se aprobó la integración de los organismos de Campeche, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Sonora y Tabasco.

CONSIDERANDOS

1. Previo a exponer las razones por las que me aparto de la decisión adoptada por la mayoría de las Consejeras y los Consejeros Electorales relativa a la integración de los Consejos de los Organismos Públicos Locales Electorales que he señalado con anterioridad, y derivado de la relación que advierto entre una y otra decisión, considero necesario expresar los motivos por los que no acompañé, en su momento, la determinación de omitir la exigencia del cumplimiento del requisito establecido en el artículo 100, párrafo 2, inciso k) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativo a que los Consejeros Presidentes y Consejeros Electorales no podían ser ni haber sido miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional durante el último proceso electoral en la entidad.

Tengo la convicción de que dicha omisión, avalada por la mayoría de las Consejeras y los Consejeros Electorales en la Convocatoria emitida para la integración de los Organismos Públicos Locales Electorales, bajo el argumento de que dicho servicio aún no existe, representó un desacierto e implicó una modificación al modelo de instituciones electorales que nos hemos dado en el país. Este modelo parte de dos premisas que se constituyen en los principales motores de calidad de los procesos electorales: por un lado, la ciudadanización de los cuerpos de dirección, y la profesionalización de quienes desarrollan actividades ejecutivas y técnicas en estos organismos, por otro.

En este sentido, me es fundamental señalar que, en modo alguno, mi decisión parte del desconocimiento del profesionalismo y convicción por el servicio público que han demostrado quienes forman parte del Servicio Profesional Electoral del ahora Instituto Nacional Electoral, así como de la capacidad técnica y amplia experiencia que han acumulado quienes han fungido como colaboradores de las autoridades administrativas electorales a lo largo del país.

Contrario a ello, estoy convencida que una de las modificaciones más relevantes en torno al sistema electoral mexicano debe ser ubicada en la creación de un Servicio Profesional Electoral Nacional, porque así como se ha dado un paso en la búsqueda y consolidación de un cuerpo de dirección autónomo e independiente a nivel local, como un eslabón más del proceso de ciudadanización, a través del nombramiento de los Consejeros Electorales a nivel local por parte del Instituto Nacional Electoral, la calidad en la organización, desarrollo y arbitraje de los procesos electorales, se sitúa en el profesionalismo con el que deben actuar quienes desempeñan actividades ejecutivas y técnicas en estos organismos.

De este modo, es claro que, la reforma pretende ampliar los beneficios del servicio profesional electoral del Instituto Federal Electoral, a todos los organismos electorales en el país, a partir de los siguientes elementos: *i)* la inamovilidad como miembro del servicio, a partir de un sistema de méritos; *ii)* el ingreso mediante una evaluación de competencias y habilidades específicas para la función electoral, y *iii)* mecanismos de ascenso tanto horizontal como vertical en la evaluación del desempeño, como garantías de un adecuado funcionamiento.

Se combaten de este modo prácticas de discrecionalidad y de insuficiencia técnica y ejecutiva en servidores públicos cuya capacidad debe ser una de las más importantes garantías del ejercicio libre del derecho a votar y ser votado, porque si bien algunas entidades del país contaban con un servicio profesional, ésta no es una práctica generalizada al nivel de desarrollo que tuvo el Instituto Federal Electoral en los últimos 20 años. La reforma constitucional, de este modo, reconoce la importancia del profesionalismo en el desarrollo de las actividades electorales y su calidad. Comparto esta visión.

La legitimidad que, desde la creación del Instituto Federal Electoral, hemos ganado como Instituto, no deviene únicamente de las decisiones adoptadas por el Consejo General, sino de forma destacada de la eficacia y eficiencia de que ha dotado el Servicio Profesional Electoral a cada uno de los procesos y

procedimientos ligados al cumplimiento de las obligaciones conferidas a esta autoridad constitucional y legalmente. Estoy convencida que tanto quienes forman parte del Servicio Profesional Electoral como quienes colaboran en la rama administrativa de este Instituto son baluarte y garantía de la calidad de los procesos electorales en toda la República.

Por ello, me resulta fundamental exponer que mi decisión no atiende a razones ajenas a lo que he expuesto, recae en la convicción de que el requisito establecido en la Ley, cuya omisión fue avalada, parte de la premisa básica de diferenciar y reconocer la importancia de contar: *i)* con un cuerpo técnico, profesional, especializado en las distintas materias que comprenden la función electoral; y *ii)* con un órgano de decisión conformado por una visión imparcial e independiente de ciudadanas y ciudadanos que, a partir de una pluralidad de trayectorias, y perfiles, supervisen y vigilen la actuación de los profesionales, y garanticen la autonomía en la función electoral desde la perspectiva de la tutela de los derechos humanos, prevista en el artículo 1° constitucional.

La independencia de dichos cuerpos atiende sustantivamente a que se trata de responsabilidades con una naturaleza distinta y, es justamente la conjunción de estas dos funciones —basada en la diferenciación de los perfiles de quienes las ejercen—, lo que garantiza el cumplimiento de los principios que deben regir la función electoral y, en consecuencia, la efectiva tutela de los derechos de las mexicanas y los mexicanos en materia electoral.

Me explico, quienes son responsables de ejecutar las determinaciones del órgano de dirección en materia de capacitación, organización, sustanciación de procedimientos, fiscalización, por mencionar algunos, deben ser profesionistas especializados que doten de certeza, oportunidad, eficacia y eficiencia los procesos y procedimientos requeridos para el cumplimiento de los objetivos de las autoridades electorales. Mientras que, quienes ejercen la función de dirigir a los organismos deben ocuparse de garantizar que la toma de decisiones recupere la

confianza de la ciudadanía en las instituciones, y atienda al cumplimiento de los principios constitucionales que rigen la función electoral, desde una perspectiva no exclusivamente técnica, sino que ponga en el centro de la reflexión la garantía de los derechos. Creo yo que es éste el diseño de las instituciones democráticas del Estado mexicano.

En este sentido, para que el máximo órgano de dirección de los organismos electorales pueda vigilar y supervisar adecuadamente la actuación del cuerpo de profesionales, es necesario que se establezca una distancia, sujeta a una temporalidad, que les permita separarse de la estructura y su funcionalidad, para conocer y evaluar los retos que enfrenta la institución en este ámbito y, a partir de ello, tomar decisiones oportunas, efectivas y estratégicas que permitan el cumplimiento de las responsabilidades conferidas a dichas autoridades.

Estas son las razones, por las que no apoyé la decisión de omitir la aplicación de la disposición prevista en nuestra ley electoral, en el marco de la aprobación de la Convocatoria relativa al proceso de designación de las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

Reitero, estoy convencida que esta decisión en cuestión, afectó en su origen y de forma irreparable el proceso de selección, la omisión conllevó el detrimento de los avances alcanzados en materia de ciudadanización de los órganos colegiados de las autoridades administrativas electorales, legado de la lucha de la sociedad civil.

Sin embargo, a partir de la decisión mayoritaria del Consejo General en este sentido, mi postura sobre el particular, en modo alguno, representó una limitante para el análisis, valoración y votación que emití respecto de la integración de los Consejos de los Organismos Públicos Locales Electorales. Como lo expondré a continuación, la valoración tenía que realizarse a la luz del universo de los perfiles de las y los aspirantes de cada entidad, a fin de identificar los que, en su conjunto y a partir de las reglas que fueron fijadas para el proceso de selección,

representaban la mejor integración de los órganos colegiados para el cumplimiento de sus fines. De ahí que más allá de las consideraciones expuestas, en su momento apoyé la designación de Consejeras y Consejeros cuya trayectoria profesional está asociada tanto a este Instituto como a las autoridades administrativas electorales locales, pues tengo la convicción de que su participación fortalece y enriquece los Consejos en cuestión.

2. Como he señalado en el preámbulo de este pronunciamiento, el sentido de mi voto es en contra de la determinación adoptada por la mayoría de las Consejeras y los Consejeros Electorales que integran el Consejo General de este Instituto respecto del Acuerdo INE/CG165/2014, únicamente por lo que hace a la integración de los Organismos Públicos Locales Electorales de las entidades de Campeche, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Sonora y Tabasco.

Tal como lo expuse en el marco de la sesión en que fue aprobado dicho Acuerdo, y lo reitero, me aparto de la decisión tomada sustancialmente por dos razones fundamentales que a continuación profundizaré, atendiendo a la obligación y responsabilidad que tengo de dar cuentas de las decisiones que adopto como Consejera Electoral de este Instituto:

a) Al hecho de la omisión de exigir el cumplimiento del requisito de no pertenecer al Servicio Profesional Electoral, lo que en sí mismo ya constituía una dificultad para estar en posibilidad de lograr la mejor integración de los Organismos, se sumó una cuestión de relevancia, en el caso de los Consejos de los Organismos Públicos Locales Electorales de Campeche, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Sonora y Tabasco: es mi convicción que no se privilegió una integración interdisciplinaria —no sólo en cuanto a las profesiones, sino por lo que hace a los perfiles, experiencias y trayectorias— de los máximos órganos de

decisión, a la luz del universo de las y los candidatos que pasaron a la etapa de entrevista.

En mi opinión, una vez que las y los aspirantes habían demostrado cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria; acreditado el examen de conocimientos, el ensayo presencial y la valoración curricular; correspondía a esta autoridad realizar un análisis detallado de la totalidad de los perfiles y trayectorias de quienes habían pasado a la etapa de entrevista a fin de buscar que la conformación de los Organismos representara la suma de cualidades y experiencias requeridas para asumir las facultades constitucionales y legales conferidas a dichos organismos.

En este sentido, la entrevista representaba una oportunidad para contar con mayores elementos y confirmar qué perfiles evidenciaban, en lo particular, la formación, trayectoria, independencia y autonomía que se requiere para asumir una responsabilidad de Estado y, cuáles en su conjunto, favorecían la integración de órganos colegiados que podían garantizar en su actuar los principios que rigen la función electoral, desde una perspectiva de derechos humanos.

Es decir, si bien se requería valorar de forma particular cada uno de los perfiles y trayectorias, es mi convicción que la determinación de la designación debía sustentarse en la contribución de cada uno de las y los candidatos seleccionados para la mejor conformación conjunta del Consejo. Este ejercicio, también implicaba una reflexión en torno a la idoneidad de la permanencia de cada uno de los perfiles en los consejos por determinado periodo.

Como lo he señalado, en modo alguno, mi posicionamiento parte del hecho de que las y los Consejeros designados no cubrían —en principio y en lo individual— con el perfil requerido, en tanto que habían acreditado cada una de las etapas previstas en la convocatoria.

El disenso atiende a otro orden, a que considero que debimos privilegiar en todo momento la conformación de Organismos que contaran con ciudadanas y ciudadanos cuyo perfil y trayectoria profesional y de vida evidenciara, más que conocimientos técnico-jurídicos en la materia electoral, una seria apuesta por el avance democrático en nuestro país, a partir de la defensa de los derechos humanos en los distintos ámbitos en que se habían desarrollado. El reto era construir órganos colegiados capaces de tomar decisiones a partir del contexto específico y de las necesidades propias de cada una de las entidades; de ahí, que la interdisciplinariedad de profesiones, perfiles, experiencias y trayectorias resultara un elemento fundamental.

Hay que decirlo, quienes fueron designados como Consejeras y Consejeros, no tendrán como reto mayor la solución de problemas técnico-operativos, se encontrarán con presiones de actores ajenos, ante un legítimo reclamo de la ciudadanía por garantizar la equidad y la certeza en la competencia electoral, enfrentarán además la realidad de sus entidades; me refiero a las necesidades específicas de la coyuntura social, económica y política; es decir también a la historia y problemas estructurales que cada entidad de nuestro país ha venido enfrentado en el proceso del tránsito democrático.

Las y los ciudadanos que integrarán estos organismos tienen una responsabilidad constitucional en sus manos. Asumir y ejercer esa función, requiere de un agudo sentido de responsabilidad, un profundo conocimiento de los riesgos e implicaciones de cada una de sus determinaciones para la tutela de derechos fundamentales, en otras palabras, requiere de un fuerte compromiso democrático.

Se requiere de ciudadanas y ciudadanos con perfiles y visiones que se complementen, capaces de entender la realidad social y salvaguardar los derechos en circunstancias adversas a su ejercicio cotidiano.

Desde esta perspectiva construí mi análisis y determiné mi posicionamiento, por ello, me aparté de la determinación relativa a la integración de los Consejos de los Organismos Públicos Locales Electorales de Campeche, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Sonora y Tabasco.

Sin descalificar a la totalidad de las y los candidatos contenidos en estas listas propuestas por la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y aprobadas por el Consejo General —tal como en su momento lo expresé en la discusión sostenida con las Consejeras y Consejeros Electorales de este Instituto—, es mi convicción que, a partir de las historias, trayectorias, independencia y autonomía que han mostrado en su proceder público y profesional, contábamos con perfiles diversos y complementarios que habrían garantizado, en su conjunto, y en una distribución diversa de las temporalidades propuestas para ocupar el cargo, una mejor conformación de los máximos órganos de dirección.

b) Por otra parte, considero que la decisión de someter a discusión la propuesta de designación de las Consejeras y Consejeros Electorales de las 18 entidades de forma conjunta, limitó la posibilidad de abrir el diálogo para analizar casos concretos a partir de las necesidades específicas de cada una de las propuestas por entidad.

En lo particular, considero que esta decisión es grave porque quienes hemos asumido la responsabilidad de ser Consejeras y Consejeros Electorales tenemos la obligación de exponer y motivar las razones en que se fundan nuestras determinaciones. El cumplimiento de esta obligación está asociado al derecho a la información de las y los ciudadanos, particularmente, cuando se circunscribe a una decisión de este nivel.

Al respecto, me es fundamental señalar que quienes formamos parte del Consejo General e incidimos con nuestro voto en las decisiones que adopta esta autoridad,

debemos, en todo momento, tener presente que el ejercicio de esta facultad está intrínsecamente ligado a una responsabilidad de Estado, lo que implica que estamos obligados a motivar y exponer las razones de nuestros pronunciamientos.

Ello no sólo atiende a la responsabilidad de Estado que nos fue conferida, sino al hecho ineludible de que esta responsabilidad debe ejercerse desde la perspectiva de la rendición de cuentas a la ciudadanía, ligada al cumplimiento de los principios de transparencia y máxima publicidad.

A esto se suma una cuestión fundamental: las decisiones que adopta esta autoridad inciden en el respeto, ejercicio y garantía de los derechos fundamentales de las mexicanas y los mexicanos consagrados en nuestra Constitución, en términos de lo previsto en el artículo 1º constitucional, pues es a partir del ejercicio de la función electoral que se da cauce a los mecanismos previstos en el sistema electoral mexicano para garantizar los derechos político-electorales, cuyo ejercicio resulta indispensable para legitimar la toma de decisiones en distintas esferas del espacio público.

De ahí, que la decisión de la integración de los Organismos Públicos Locales Electorales ameritaba no sólo la mayor de las reflexiones y un análisis profundo, sino, destacadamente, un debate público. Las ciudadanas y los ciudadanos tienen el derecho de escuchar los motivos y razones que sustentan las determinaciones de esta autoridad; estoy convencida que actuar en contrario, representa un riesgo para la legitimidad de este Instituto Nacional Electoral.

Es mi convicción que la determinación de limitar la reflexión en torno a una decisión cuya trascendencia para la vida pública del país es evidente, resulta grave e injustificable a la luz de los argumentos que he expuesto. La facultad que fue conferida a este Instituto, atendió a una preocupación legítima de la ciudadanía respecto del actuar de las autoridades locales; en este contexto, la designación de las y los Consejeros debía ser producto de un debate público del mayor nivel.

Son los argumentos y no la ausencia de debate lo que legitima a un órgano colegiado. Estamos obligados a rendir cuentas de nuestro actuar tanto en lo individual como a nivel institucional.

3. Para finalizar mi reflexión, debo señalar que estoy convencida que el cambio en la sede de la designación de quienes dirigirán los Organismos Públicos Locales Electorales buscó impedir la influencia que, contraria a la autonomía, los gobernadores y los poderes públicos locales establecían en la designación de personas cuya independencia y actuación conforme a los principios de la función electoral, han sido puestos en entredicho reiteradamente en los últimos años. Se trataba de un eslabón más en el fortalecimiento de la ciudadanización en los órganos a este nivel, y de un mecanismo que partió del reconocimiento en torno a la ausencia de división de poderes que por desgracia, aún vivimos en muchas de las entidades de nuestro país.

Así, la facultad de nombramiento de las Consejeras y los Consejeros Presidentes y las Consejeras y Consejeros Electorales está en la base, en el centro, de la reforma político-electoral que edificó el Instituto Nacional Electoral y, al mismo tiempo, representaba el reconocimiento y la apuesta político legislativa por lograr una mejoría en las condiciones de competencia política de las entidades de la república.

Pienso que la manera de honrar este voto de confianza y esta responsabilidad era a partir de una determinación autónoma, independiente y pública de las razones que cada uno de quienes integramos el Consejo General tuvimos para optar entre las diversas candidaturas puestas a nuestra consideración.

El Instituto Nacional Electoral, que está ligado a la historia del Instituto Federal Electoral, es sin lugar a dudas, uno de los referentes obligados al hablar de los

avances en materia de democratización. Su construcción, conformación, atribuciones y constante renovación, han sido producto de una profunda reflexión del sistema electoral mexicano a la luz de las necesidades, problemáticas y aciertos identificados en el marco de los procesos electorales.

Quienes hemos tenido la oportunidad y responsabilidad de formar parte del Consejo General hemos sido partícipes de esa reflexión, como muchos otros actores, pero estoy convencida que su origen se encuentra en la sociedad civil, en las y los ciudadanos que incansablemente han exigido y luchado por el reconocimiento de los derechos —particularmente los derechos políticos— y han vigilado su efectivo respeto y garantía.

Es precisamente por las muchas luchas y esfuerzos que ha supuesto para nuestro país la institucionalización de la democracia, desde distintos espacios, muchos de ellos ajenos a esta Institución y a las instituciones públicas y electorales, que estoy convencida que los integrantes de los máximos órganos de dirección designados, debían reflejar —colegiadamente— el conjunto de visiones, proyectos y trayectorias que han servido como referencia y punto de partida de las mismas. Es mi convicción que la decisión en cuestión debía partir, necesariamente, de ese análisis.

Resultaba fundamental que el voto de confianza que se dio a esta Institución al conferirle una facultad tan relevante para la vida pública del país, tuviera como respuesta una decisión sustentada en una discusión pública y abierta.

Estábamos obligados a no perder de vista que el principal motivo de la reforma político-electoral fue dar una respuesta a la desconfianza que existía en las autoridades electorales locales. De la decisión adoptada dependía que llegaran a los Consejos de los Organismos Públicos Electorales Estatales, las y los mejores para asumir una responsabilidad de Estado.

En este sentido, si bien estoy convencida que dentro de las listas sometidas a consideración y aprobadas por el Consejo General se encontraban muchas ciudadanas y ciudadanos de una gran valía; no puedo compartir la totalidad de las integraciones en su conjunto, pues en algunos casos no reflejan la pluralidad de las visiones, trayectorias y perfiles existentes en una entidad y, en otros, priorizan la valía técnica, sobre el trabajo, la trayectoria, el perfil y la experiencia de otros de los aspirantes que contendían dentro de este proceso de selección.

El resultado de la decisión histórica tomada por el Consejo General, no se reduce en la definición de los nombres de las personas elegidas —aunque la historia profesional y pública es un referente obligado—; el resultado real se verá reflejado en el actuar de esos órganos colegiados, en su defensa del interés público desde la autonomía e imparcialidad, en el nivel de la reflexión que sustentará sus decisiones, en la capacidad que tendrán para entender la realidad de su entidad, identificar en qué momento deben tomar una decisión, actuar con autonomía y, particularmente, para asumir con responsabilidad sus decisiones.

En virtud de las razones anteriormente expuestas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, Base V, párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 36, párrafo primero y 39, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 14, párrafo 1, fracción b), del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral y 26, párrafo 6, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emito el presente **VOTO PARTICULAR** respecto del Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la designación de Consejeras y Consejeros Presidentes y Consejeras y Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales, identificado con el registro INE/CG165/2014, aprobado por la mayoría de las Consejeras y los Consejeros Electorales del Consejo General de este Instituto,

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

**VOTO PARTICULAR
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES
CONSEJERA ELECTORAL**

en el marco de la sesión extraordinaria de dicho órgano colegiado realizada el pasado martes 30 de septiembre de 2014, únicamente por lo que hace a la conformación de los Organismos Públicos Locales Electorales de Campeche, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Sonora y Tabasco.

**LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES
CONSEJERA ELECTORAL**